

NOTIFICACIÓN POR AVISO
Artículo 69 Ley 1437 de 2011

Lugar y fecha: 8 de agosto de 2022

Acto para notificar: Oficio No.44841 del 2 de agosto de 2022 - Respuesta a Derecho de Petición Anónimo, sin datos para notificar.

Persona para notificar: Anónimo

Autoridad que expide el acto administrativo: **DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.**

ANTECEDENTE:

El día 2 de agosto de 2022 a través del Oficio No 44841 la Dirección de Control Físico profirió Respuesta a denuncia presentada por el Anónimo.

Teniendo en cuenta que la petición fue presentada por Anónimo, donde no reposa correo electrónico para dar su respectiva notificación, se hace necesario dar aplicación a las disposiciones del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, en tal sentido la Dirección de Control Físico procede a:

NOTIFICAR POR AVISO

Anónimo, sobre el contenido del Oficio No. 44841 del 2 de agosto de 2022-Respuesta a Derecho de Petición.

Conforme al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se adjunta al presente aviso copia íntegra del Oficio No. del 2 de agosto de 2022, y se procede a su publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de Pereira y en la entidad territorial ubicada en la carrera 7 No 18-55 Palacio Municipal PISO 1 Pereira- Risaralda, lugar de acceso el público, por el término de cinco (5) días.

Es de anotar que contra el oficio que se notifica no procede recurso alguno. El presenteaviso

Se fija el día 8 de agosto de 2022 a las 7:00 a.m.

Se desfija el 15 de agosto de 2022 a las 4:00 p.m.

Nota: Se hace la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. (Art. 69 Ley 1437 de 2011)


JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO
Director Operativo De Control
Físico



Pereira, 02 de agosto de 2022

ANONIMO

Pereira, Risaralda.

No. 44841



Asunto: Respondiendo a: PERSONA NATURAL: Anónimo ASUNTO: SOLICITUD VISITA CAIMALITO. Radicado No.18170 del 17 de Junio del 2022

Cordial saludo,

El suscrito director de la Dirección de Control Físico, en uso de sus facultades legales de ejercer funciones de Inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y protección sobre el espacio público en el Municipio de Pereira se permite responder a denuncia anónima presentada, con fecha 17 de junio de 2022 bajo radicado 18170 en los siguientes términos:

PRIMERO: En la fecha antes citada mediante denuncia anónima informaron entre otras cosas que “en la orilla del río, se está construyendo un segundo piso en material, la zona es de alto riesgo”

SEGUNDO: una vez recibida la petición fue remitida a la dirección de control físico para lo de sus competencias.

TERCERO: para el día 29 de julio del presente año, por medio de la profesional en arquitectura señora Juliana Castillo, quien hace parte del equipo de profesionales de la Dirección de Control Físico, practico visita técnica a la urbanización plan de vivienda en caimalito orilla del río casa 328.

CUARTO: Una vez allí fuimos atendidos por la señora Sandra milena Gómez, quien manifestó ser la propietaria del inmueble, y en sitio se pudo evidenciar “una vivienda de un piso construida en estructura en concreto y muros en mampostería simple, ladrillo farol, con placa de cubierta con estructura en concreto, cuartos en madera y esterilla bañada en concreto.”

Cra. 7 No. 18-55 Pereira -Risaralda (+576) 3248000 www.pereira.gov.co

QUINTO: de lo antes narrado se practicó un informe de visita Soportado con el respectivo registro fotográfico y se logró determinar que el predio objeto de la intervención es de propiedad del municipio de Pereira, ubicado en suelos de protección de recurso hídrico no mitigable, dicha ocupación indebida es de un área aproximada de 52 metros cuadrados.

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con lo establecido en el Título II, Artículo 206, de la ley 1801 del año 2016 respecto a las Atribuciones de los inspectores de Policía rurales, urbanos y corregidores, Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas entre otras 1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.

La Constitución de 1991 estableció un esquema de descentralización (artículo 1) que determina cierta autonomía regulativa para las entidades territoriales. Sin embargo, la Carta Política no descuidó la armonía jurídica de la república y la sujeción de las normas de inferior jerarquía a la misma Constitución y a las leyes. En concordancia con ello, el artículo 287 de la Constitución estableció esta relación entre autonomía territorial y sujeción al ordenamiento superior, al decir: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y de la ley”.

En esta lógica, la Carta se refirió al ordenamiento territorial como un asunto que debe definirse de manera conjunta por la Nación, y por las entidades territoriales según las competencias delimitadas por la ley. Así, dispone el artículo 289 Superior:

“La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. Lo anterior enseña cómo se realiza la descentralización armónica en materia de ordenamiento territorial. De manera que la competencia de las entidades territoriales, se desarrolla dentro de un marco general de referencia. Y es, en concordancia con dichos presupuestos, que el artículo 311 de la Constitución Política le impone al Municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, el deber, entre otros, de “ordenar el desarrollo de su territorio”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha definido que la función de ordenar el territorio implica “una serie de acciones, decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática, participativa, racional y planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. Se trata, ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria como es su dimensión y proyección espacial. C-750 de 2000, sentencias, C- 117 de 2006, C- 123 de 2014.

En atención a los anteriores mandatos superiores, el Legislador expidió la Ley 388 de 1997, con la cual buscó armonizar las disposiciones que anteriormente regulaban el tema del ordenamiento territorial (Ley 9 de 1989) con las nuevas normas Constitucionales y las leyes orgánicas del plan de desarrollo, áreas metropolitanas y la que creara el sistema nacional ambiental. Con esta normatividad se regularon los aspectos referidos a los mecanismos que le permitieran al municipio promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural; y la garantía a los propietarios de la utilización del suelo conforme con la función social de la propiedad y la efectividad del derecho a la vivienda (artículo 1º).

Esta ley, expresamente señala que el ordenamiento territorial es “un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, (...) dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción, regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. Y determina que su estatuto se fundamenta en los principios de la función social y ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios (artículo 2).

Al mismo tiempo, la Ley 388 de 1997 dispone la creación de un Plan de Ordenamiento Territorial a cargo de los municipios y distritos, que funcione como un “instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal”. Dicho Plan de Ordenamiento Territorial es definido en la ley anteriormente mencionada “como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo” (artículo 9) y establece entre sus componentes el urbano, el cual está constituido, como su nombre lo indica, “por las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano” (artículo 11), que implica “la expedición de normas urbanísticas” (numeral 11 del artículo 13), las cuales “regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del

suelo” y se dividen en normas estructurales y generales, siendo, éstas últimas, “aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión.

Por consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones” (numeral 2 artículo 15).

Al tiempo, la Ley 388 de 1997 modificada en lo referido a las sanciones urbanísticas por la Ley 810 de 2003, otorgó a los municipios y distritos la competencia para sancionar las infracciones urbanísticas, entendidas, éstas, como toda “actuación de construcción” que contraviniera el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial y las demás normas que lo desarrollen; y de la misma manera, la referida ley “considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos comerciales, industriales, institucionales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que el encerramiento, la intervención o la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia” (artículo 103).

Frente a estas infracciones, la mencionada ley confiere a los alcaldes la competencia para adelantar las actuaciones administrativas tendientes a hacer cumplir las normas urbanísticas y sancionar su incumplimiento. Para tal efecto, la ley contempla la posibilidad de promover actuaciones de orden policial, en las que se actúe directamente sobre las construcciones en los casos que se adelanten actuaciones urbanísticas omitiendo el deber de solicitar licencia o cuando no se ajusten a ella, por lo que “el alcalde o su delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras respectivas” (artículo 103).

De la misma manera, en el artículo 104 se establecen sanciones de orden pecuniario, consistente en multas que varían según el tipo de infracción y el metraje que la configure, y también contempla la demolición total o parcial “de las obras desarrolladas sin licencia, o de la parte de las mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia, a costa del interesado, pudiéndose cobrar por jurisdicción coactiva si es del caso, cuando sea evidente que el infractor no se puede adecuar a la norma”.

De lo expuesto, se reconoce la configuración normativa de un Plan de Ordenamiento

Territorial a cargo de los municipios y distritos, como forma de concreción del modelo de descentralización en armonía con los principios y normas constitucionales y legales. Lo cual determina, para las entidades territoriales, unas competencias, primero, en lo relacionado con la facultad regulativa y, segundo, respecto a la adopción de medidas administrativa para controlar, supervisar y sancionar el incumplimiento de la normatividad urbanística.

Para atender el caso concreto planteado, se tiene que se enviara la denuncia presentada con todos los anexos al doctor JULIO CESAR MURILLO ZAPATA en calidad de Técnico administrativo , para que desde allí sea remitida la denuncia con sus anexos, al Inspector Municipal de policía con jurisdicción y competencia en el área objeto de la petición con el fin de que se tomen las medidas pertinentes en dar cumplimiento a lo dispuesto en el título XIV “ del urbanismo” capítulo I comportamientos que afectan la integridad urbanística los artículos 135 literal A) numeral 4, 206, 216 y 77 numeral 2 de la ley 1801 del año 2016 y las demás normas que lo complementen o modifiquen.

De esta forma damos respuesta a la petición presentada, reiterando siempre nuestra disposición de servicio.

Cordialmente,



JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO
Director (a) Operativo (a) de Control Físico

Proyectó y Elaboró: Jorge Eduardo Restrepo Jaramillo